



H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

PRESIDENCIA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO

RECIBIDO
29 AGO. 2022

[Handwritten signature]
1:50pm

f30329

OFICIALÍA DE PARTES
RECIBIDO
29 AGO. 2022
1330
H. CONGRESO DEL ESTADO

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

La suscrita **Ana Georgina Zapata Lucero**, Diputada de la LXVII Legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrante al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 68 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Chihuahua en relación con el artículo 71 Fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167 fracción I y 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Chihuahua, comparezco ante esta Honorable Representación Popular para someter a su consideración la presente **Iniciativa de con carácter de Decreto con el propósito de reformar y adicionar los artículos 2 inciso c) y 44 fracciones IX, X y XI de la Ley General de Partidos Políticos, solicitando que en caso de ser aprobada se eleve ante el H. CONGRESO DE LA UNIÓN, como iniciativa de Ley propuesta por la Sexagésima Séptima Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, al tenor de la siguiente:**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La transversalidad de género ha sido definida como *"la organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que la perspectiva de la igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas"*.



La transversalidad de la perspectiva de género es un método de gestión para promover la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, transmutando las estructuras y lograr la igualdad sustantiva entre ambos sexos; es definida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (1997): *“como la integración sistemática de las situaciones, intereses, prioridades y necesidades propias de las mujeres en todas las políticas del Estado, con miras a promover y velar por la igualdad entre mujeres y hombres”*.

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia el término transversalidad, es cualidad de transversal, ahora bien, el concepto de transversal es el siguiente: *“Del lat. mediev. transversalis, y este der. del lat. transversus. 1. adj. Que se halla o se extiende atravesado de un lado a otro.”*

La transversalidad de género se utiliza, como sinónimo de enfoque integrado de género, para referirse a la responsabilidad de todos los poderes públicos en el avance de la Igualdad entre mujeres y hombres., por lo que es la incorporación, la aplicación del Principio de Igualdad de Trato y de Oportunidades entre mujeres y hombres al acceso a los órganos colegiados **de cualquier índole**, de modo, que se garantice el acceso a todos los cargos en igualdad de condiciones, teniendo en cuenta las desigualdades que ha existido y existen.

No solo en los cargos de elección popular se debe ponderar el principio de igualdad de trato y de oportunidades lo que va encaminado a revisar las estructuras y formas de organización, para erradicar, desde su base, los elementos estructurales que



hacen que se mantengan las desigualdades sociales entre ambos sexos, sino ello también debe exigirse en la elección de los órganos partidistas.

De conformidad con el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prohíbe toda discriminación motivada –entre otros factores–, por el género, y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas., De conformidad con el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prohíbe toda discriminación motivada –entre otros factores–, por el género, y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

De igual manera, el artículo 4º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos señala:

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Párrafo reformado DOF 06-06-2019

Por otra parte el artículo 41, fracción I, de la Constitución Federal establece que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin:

- 1) promover la participación del pueblo en la vida democrática,
- 2) contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos,
- 3) hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal,



libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros.

El referido artículo 41 constitucional consagra el principio de paridad de género, cuya finalidad es proteger la igualdad de oportunidades y la equidad de género en la vida política del país, con el fin de fomentar la participación de las mujeres en las contiendas electorales, y que ello se manifieste de forma material o sustantiva, además, en la composición de los órganos representativos del Estado, y desde luego en todos aquellos órganos que inciden en la vida y participación política de las y los ciudadanos, reflejando en la mayor medida posible, el porcentaje efectivo de población de mujeres y hombres que existen en la sociedad mexicana, y que las decisiones que se adopten incluyan los deseos, aspiraciones, anhelos y el sentir de ambos géneros, para lograr una participación equilibrada del género femenino y masculino en la obtención de candidaturas y participación en la vida interna de los partidos políticos.

Así, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, establece en el artículo 5, fracción I, que las acciones afirmativas son el conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres. De igual forma, el artículo 17, fracción III, del referido ordenamiento, establece que la política nacional en materia de igualdad, tendrá como objetivos fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres.

De acuerdo a la última reforma político-electoral de la Constitución Federal de siete de julio de dos mil catorce, se estableció el principio de paridad de género en las



candidaturas a legislaturas federales y locales, no existe la posibilidad de hacer excepciones en la designación de ninguna de las candidaturas. Todo ello, a fin de consagrar el derecho de mujeres y hombres a tener acceso por igual a ser designados candidatos en las contiendas de elección a cargos de representación popular, asegurando la existencia de un equilibrio real entre hombres y mujeres, y así garantizar la participación de la mujer en su totalidad, para favorecer con ello, el desarrollo de México y el fortalecimiento de sus instituciones.

Este fin solo se logra si desde la base, que son los partidos políticos postulantes se retiran los obstáculos para que las mujeres tomemos las decisiones materiales para hacer efectivos nuestros derechos, por ello la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio ciudadano SUP-JDC-3/2014, estableció que la paridad “implica una igualdad sustantiva encaminada a lograr una participación efectiva en la vida pública del país, esto es, garantizar una oportunidad real de ejercer el cargo, al eliminar cualquier tipo de impedimento que pudiera existir”.

Así también, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1° y 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas; que el derecho de acceso a cargos de elección popular, debe ejercerse en condiciones de igualdad y bajo una perspectiva de equidad de género, principio que debe de aplicar también a los cargos partidistas.



No obstante que el principio de paridad de género se ha interpretado en forma extensiva por el máximo tribunal en materia electoral y se habla de paridad horizontal y vertical, la realidad de las cosas es que a la mujer se le sigue relegando, dejando las posiciones más difíciles o confiriéndole los cargos de menor importancia en la equivalencia igualitaria frente al género masculino.

Ello en parte obedece a en las dirigencias nacionales y estatales de los partidos políticos existe un predominio del género masculino lo que de manera natural impide que desde las bases partidistas se gesten políticas de empoderamiento de la mujer.

En este sentido y bajo la base de paridad de género transversal y horizontal, se deben de ponderar todas las circunstancias en que se realicen las elecciones de cargos partidistas, a fin de que sin importar que se trate de fórmulas de presidenta o presidente y secretaria o secretario, se tome en cuenta el conjunto orgánico partidista que se integra por 32 comités directivos estatales y además su historial de dominancia por un solo género, aplicando acciones afirmativas que lo impidan, tal y como se señala en el artículo 56 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para el caso de las fórmulas de senadores plurinominales, para poner un ejemplo que pondera que género encabeza el periodo electivo anterior, incorporando a la elección de dirigencias partidistas dicho principio :

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadoras y senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa



y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos.

La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidaturas que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

Las treinta y dos senadurías restantes serán elegidas según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.

De esta forma se debe ponderar por los partidos políticos de forma obligatoria en cada caso en que se vaya a proceder a la elección de dirigencias estatales, la predominancia de género a fin de determinar cuál de ellos debe encabezar la fórmula que será sustituida para que se alterne con género distinto en la presidencia a ocupar, permitiendo a las mujeres intervenir activamente en la vida interna de los partidos políticos y no solo determinar en forma aislada que debe ser hombre y mujer, pues es evidente que se está favoreciendo al género masculino al revisar estructuralmente el organigrama de las dirigencias actuales y su historial de renovación.



Las siguientes tesis sustentan también mi argumentación:

Jurisprudencia 20/2018

PARIDAD DE GÉNERO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLA EN LA INTEGRACIÓN DE SUS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN.-

De la interpretación sistemática de los artículos 1º, 4º y, 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 3 y, 37, párrafo 1, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos; así como 36, fracción IV, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se desprende que los institutos políticos deben garantizar la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos de dirección, así como promover la representación igualitaria entre mujeres y hombres dentro de sus estructuras internas. Por tanto, aunque la normativa interna de los partidos políticos no prevea la paridad de género o no la defina expresamente, éstos se encuentran obligados a observarla en la integración de dichos órganos, por tratarse de un estándar constitucional que garantiza la participación efectiva de las mujeres.

Sexta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-369/2017 y acumulados. —Actores: Santiago Vargas Hernández y otro. —Órganos responsables: Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias del PT y otros. —22 de junio de 2017. —Unanimidad de votos. —Ponente: Mónica Aralí Soto Fregoso. —Secretarios: Juan Manuel Arreola Zavala, Omar Espinoza Hoyo, Jesús González Perales y Carmelo Maldonado Hernández. Recurso de reconsideración. SUP-REC-1319/2017. —Recurrentes: Agustín Nava Huerta y otra.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del



H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México.—18 de octubre de 2017.—Unanimidad de votos.—Ponente: Indalfer Infante Gonzales.—Secretario: Alejandro Ponce de León Prieto.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-20/2018. —Actora: Diana Cosme Martínez. —Autoridad responsable: Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática. —14 de febrero de 2018. —Mayoría de cuatro votos. —Ponente: Indalfer Infante Gonzales. —Disidentes: Mónica Aralí Soto Fregoso, Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas Valdez. —Secretarios: Magali González Guillén y Jorge Armando Mejía Gómez.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 11, Número 22, 2018, páginas 20 y 21.

Jurisprudencia 11/2018

PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, párrafo quinto, 4° y 41, Base I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4, inciso j), 6, inciso a), 7, inciso c), y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, numeral 1,



y 7, incisos a) y b) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; II y III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se advierte que la paridad y las acciones afirmativas de género tienen entre sus principales finalidades: 1) garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, 2) promover y acelerar la participación política de las mujeres en cargos de elección popular, y 3) eliminar cualquier forma de discriminación y exclusión histórica o estructural. En consecuencia, aunque en la formulación de las disposiciones normativas que incorporan un mandato de postulación paritaria, cuotas de género o cualquier otra medida afirmativa de carácter temporal por razón de género, no se incorporen explícitamente criterios interpretativos específicos, al ser medidas preferenciales a favor de las mujeres, deben interpretarse y aplicarse procurando su mayor beneficio. Lo anterior exige adoptar una perspectiva de la paridad de género como mandato de optimización flexible que admite una participación mayor de mujeres que aquella que la entiende estrictamente en términos cuantitativos, como cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por ciento de mujeres. Una interpretación de tales disposiciones en términos estrictos o neutrales podría restringir el principio del efecto útil en la interpretación de dichas normas y a la finalidad de las acciones afirmativas, pues las mujeres se podrían ver limitadas para ser postuladas o acceder a un número de cargos que excedan la paridad en términos cuantitativos, cuando existen condiciones y argumentos que justifican un mayor beneficio para las mujeres en un caso concreto.

Sexta Época:

Recurso de reconsideración. SUP-REC-1279/2017 .—Recurrentes: Uziel Isaí Dávila Pérez.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción



Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León.—18 de octubre de 2017.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Reyes Rodríguez Mondragón.—Secretarios:
Mauricio I. Del Toro Huerta y Augusto Arturo Colín Aguado.

Recurso de reconsideración. SUP-REC-7/2018. —Recurrentes: Eva Avilés Álvarez
y otras. —Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción
Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco. —31 de enero de 2018. —
Unanimidad de votos. —Ponente: Indalfer Infante Gonzales. —Secretarios: Anabel
Gordillo Argüello y Rodrigo Escobar Garduño.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-4/2018 y acumulado. —
Actores: Partido de Renovación Sudcaliforniana y otro. —Autoridad responsable:
Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur. —14 de febrero de 2018. —
Unanimidad de votos. —Ponente: Felipe de la Mata Pizaña. —Secretarios: Laura
Márquez Martínez, Mercedes de María Jiménez Martínez, María del Carmen
Ramírez Díaz, Carlos Gustavo Cruz Miranda y Fernando Ramírez Barrios.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de abril de dos mil
dieciocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la
declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 26 y 27.

El derecho a la participación política debe ejercerse en condiciones de igualdad, en
términos de los artículos 1o. y 4o. de la Constitución; 1, 2, 3 y 7 de la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; I, II y III
de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; y, 1, 23 y 24 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 4, inciso j), y 5 de la Convención



Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; de tal modo que los partidos y las autoridades garanticen la paridad de género en la integración de las dirigencias de partidos políticos desde una doble dimensión: por una parte, deben asegurar la paridad vertical, con la elección de dirigentes de un mismo comité u órgano equivalente integrado por mujeres y hombres en la misma proporción y, por otra, desde un enfoque horizontal, deben asegurar la paridad en la integración de todos sus comités estatales u órganos equivalentes que conforman su estructura nacional.

A través de esta perspectiva dual, se logra un efecto útil y material del principio de paridad de género, lo que permite cumplir, de manera efectiva e integral, con las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, pero además se debe alternar los cargos de importancia a fin de las presidencias de las dirigencias no se ocupen únicamente por el género masculino.

El artículo 28 de la Carta Democrática Interamericana obliga a que los Estados promuevan "la plena e igualitaria participación de la mujer en las estructuras políticas de sus respectivos países, como elemento fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura democrática".

A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos obliga a cada uno de los Estados parte a respetar y garantizar a los individuos todos los derechos humanos sin distinción alguna, de ahí que, por un lado, el artículo 3, los comprometa a asegurar a hombres y mujeres la igualdad formal y sustantiva y, por otro, el artículo 26 establezca que "todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. Al respecto, la ley prohibirá toda



discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social."

El Comité para Eliminar la Discriminación contra la Mujer, en la recomendación general 23, señaló que las mujeres se ven excluidas de la vida política y del proceso de adopción de decisiones públicas. En dos mil seis, manifestó su preocupación por el reducido número de mujeres en cargos de dirección municipales y recomendó a México fortalecer acciones para aumentarlo e introducir "medidas especiales de carácter temporal, a fin de acelerar las gestiones para facilitar el ascenso de las mujeres a puestos de liderazgo". En dos mil doce, reconoció los avances del Estado Mexicano para que las mujeres participen en la vida política y recomendó dar cumplimiento al marco jurídico electoral en el plano estatal, derogando las disposiciones discriminatorias y sancionando la inobservancia de las cuotas de género.

Como puede advertirse, es nuestra obligación instrumentalizar normas para hacer efectiva la paridad vertical y horizontal que es correlativa del derecho a la participación política en condiciones de igualdad. Para cumplir con el deber constitucional y convencional de construir una democracia incluyente, es necesario tutelar el principio de paridad de género.

En base a estos antecedentes, someto a consideración de esta Representación Popular, el siguiente proyecto de decreto:



DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman y adicionan los artículos 2 inciso c) y 44 fracciones IX, X y XI de la Ley General de Partido Políticos para quedar redactados de la siguiente manera:

Artículo 2.

1. Son derechos político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, con relación a los partidos políticos, los siguientes:

a) ...

b) ...

c) Votar y ser votado para todos los cargos de elección popular dentro de los procesos internos de selección de candidatos y elección de dirigentes, teniendo las calidades que establezca la ley y los estatutos de cada partido político ***respetando el principio de paridad tanto en su vertiente vertical como horizontal.***

Artículo 44.

1. Los procedimientos internos para la integración de los órganos internos de los partidos políticos y para la postulación de candidatos a cargos de elección popular, estarán a cargo del órgano previsto en el inciso d) del párrafo 1 del artículo anterior y se desarrollarán con base en los lineamientos básicos siguientes:



- a) El partido político, a través del órgano facultado para ello, publicará la convocatoria que otorgue certidumbre y cumpla con las normas estatutarias, la cual contendrá, por lo menos, lo siguiente:

I. a la VII. ...

VIII. Fecha y lugar de la elección;

IX. Fechas en las que se deberán presentar los informes de ingresos y egresos de campaña o de precampaña, en su caso;

X. Reglas para aplicar de forma efectiva el principio de paridad de género en su vertiente horizontal y vertical, y

XI. En el caso de las convocatorias a elección de dirigencias nacionales o estatales de los partidos políticos, se deberá contemplar el principio de alternancia en el género que encabece la fórmula de los cuerpos colegiados que los integren, debiendo alternarse tomando como base el género que es sustituido en la elección de que se trate.

- b) El órgano colegiado a que se refiere el inciso d) del párrafo 1 del artículo anterior:

I. ...



H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

II. ...

TRANSITORIOS:

UNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En el Palacio Legislativo del Estado de Chihuahua, a los 29 días del mes de agosto del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

DIPUTADA ANA GEORGINA ZAPATA LUCERO

***Integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional***